

PROBABLEMENTE, como Godot en la conocida obra teatral de Samuel Becket, no llegue. Aunque nunca se pueda negar la posibilidad de su llegada. Pero en todo caso da igual: es como si hubiera llegado ya. Toda la situación política y económica, todos los protagonistas del momento, actúan en función de él: bien para impedirlo o para posibilitarlo, sin olvidar a los que quieren rentabilizarlo. Hasta los pasotas, pasando por todas las especies conocidas de la acracia de derecha, lían sus porros haciendo cábalas sobre las mil y una telarañas de la conspiración no democrática.

Todo está absolutamente paralizado. Gobierno, oposición, derecha e izquierda, sindicatos y organizaciones empresariales, dejan de lado las profundas y serias contradicciones que los dividen y enfrentan para afrontar la resurrección de un cadáver que daban por definitivamente enterrado. Y nada volverá a ser como antes hasta que no se desvelen las tres incógnitas de la actual crisis política: hasta dónde alcanza la ramificación conspirativa, cómo se resolvió el «impasse» de la madrugada del 23 al 24 de febrero y cuáles son las razones reales, independientemente de que la fórmula sea correcta o no, que impiden el gobierno de coalición.

Tres interrogantes precedidas de otra no menos esencial ¿por qué dimitió Suárez? Lo ocurrido el 23 de febrero no es más que la segunda parte de lo sucedido el 29 de enero. Quienes hicieron dimitir al primer presidente constitucional y democrático, consciente o inconscientemente, secundaban operaciones de más altos vuelos. Derribar extraparlamentariamente a Adolfo Suárez, de espaldas al Congreso de los Diputados y a las urnas democráticas, era quebrar al margen de la política del anterior presidente— el único punto de equilibrio político que en esta coyuntura tenía el frágil proceso democrático de nuestro país. Así, como era previsible para cualquier observador, las mociones de censura contra Adolfo Suárez y la rebelión de los críticos de Unión de Centro Democrático han beneficiado, objetivamente, a los enemigos de la democracia.

Pocas veces en un proceso histórico un golpe de Estado ha sido tan cantado como este recién intento fracasado. Después del 29 de enero, la forma como es defenestrado el anterior jefe de Gobierno, las señales anunciando la intentona son inequívocas: desde el artículo de Almendros el primero de febrero —La decisión del Mando Supremo— hasta la oportuna muerte de un etarra tras su paso por los despachos de la Dirección General de Seguridad, los postes de señalización son múltiples y bien visibles. La sorpresa no está en el golpe sino en la forma en que se produce, demasiado brutal, y en el tiempo, su carácter prematuro.

ESPERANDO EL GOLPE

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

La reedición de un pacto

Quienes conozcan con exactitud las cuatro respuestas, a las preguntas aludidas más arriba, podrán calibrar con precisión el error o la corrección de los dos planteamientos existentes en torno a cómo neutralizar la amenaza involutiva por la vía armada. Todo ello deshojando esta controversia de los aspectos partidistas que la encubren; al igual que el tipo de salida del anterior régimen escondía una pugna por hegemonizar el proceso democrático, el modo de neutralización del peligro golpista encierra una pugna semejante por rentabilizarlo políticamente. Dilema, claro está, más bien teórico; dada la postración y desfallecimiento de la izquierda, que entonces podía echar un cierto pulso práctico. Lo que, evidentemente, no ocurre en esta hora.

Máxime si se tiene en cuenta, además, que en las dos manifestaciones de la misma crisis no ha existido más que un solo núcleo democrático a la altura de las circunstancias. Tanto en los acontecimientos del 29 de enero como en los del 23 de febrero en este país no hubo más colectivo con capacidad de análisis y decisión política que, valga la redundancia, el diario «El País». Situación paradójica que resume la miseria de la vida política española: unos dirigentes políticos que necesitan leer los editoriales de un periódico para enterarse de lo que sucede y orientarse en el camino a seguir. Nada ni nadie, desde un

punto de vista democrático, fue capaz de explicar lo que sucedía y de tomar iniciativas en aquellas dos fechas, salvo el citado medio de comunicación.

Por todo ello la derecha no va ahora a realizar lo que no quiso efectuar en la primavera de 1976. La ruptura, ayer como hoy, no interesaba a sus objetivos y, por si fuera poco, no está claro que en la actualidad pudiera llevarla a cabo en la hipótesis improbable de que la desease. De este axioma político se desprende que no hay más camino viable que el que pasa por reeditar un cierto pacto tácito con los sectores sociales e institucionales aledaños a la involución, que posibilitó la operación reformista. Compromiso paralelo a un intento de división de los segmentos no democráticos, recuperando a quienes todavía pueden ser integrados, y simultáneo con la apropiación de parte del programa involutivo que pueda encajar en un marco constitucional y democrático.

Es aún pronto para conocer el contenido de este acuerdo no explicitado, pero el contenido del proyecto gubernamental de la Ley Orgánica del Gobierno —aumento de los poderes del ejecutivo en detrimento de un legislativo ya muy escaso de atribuciones— y el nombramiento de Manuel Ballesteros como coordinador de las brigadas antiterroristas, parecen marcar con cierta claridad una cierta inversión del rumbo de los acontecimientos. Téngase en cuenta que aún queda buena parte de las leyes orgánicas por desarrollar, que dotarán de

contenido a un texto constitucional ambiguo por consensuado. Desarrollo constitucional que si antes del 23 de febrero aparecía escorado hacia la diestra, aparece ahora tumbado.

El otro proyecto, el de adecuar los institutos estatales a la Constitución, no es más que una propuesta teórica. Y sabido es que una respuesta teórica no es más que una respuesta a medias. Sus patrocinadores en absoluto cuentan en esta difícil e inestable correlación de fuerzas, nunca mejor empleada esta expresión a una situación política. No adecua quien quiere sino quien puede. Para nadie es un secreto, sobre todo después de la larga noche del 23 de febrero, la enorme fragilidad, debilidad e incapacidad de la izquierda. La fórmula que propone ni siquiera puede cumplir el papel de catalizador, que cumplieron hace cinco años los organismos unitarios democráticos.

El vencimiento de una letra

Pero el problema de los pactos, máximes los que se acuerdan en las circunstancias que han rodeado el fallido golpe, es que hay que cumplirlos. Puede conseguirse de momento una tregua, puede incluso lograrse la renovación de los plazos de las letras firmadas, mas el vencimiento final acaba por llegar. Es el drama de cualquier compromiso: el ser una carrera contra el reloj en la que la cuenta atrás es inexorable y no hay quien la detenga.

El punto débil de esta operación es precisamente el desfase temporal entre el ritmo del Gobierno y el ritmo de los sectores periféricos de la involución. Apostar por el cambio biológico, lo que conlleva una espera de varios años, y por las contradicciones internas de los involucionistas— a la vez que se va renovando el pacto con ellos— es demasiado incierto y peligroso, por cuanto la letra a satisfacer tiene un alcance en el tiempo mucho menor que esta reconversión biopolítica a muy largo plazo.

Existe en este tipo de acuerdo implícito una parte menos difícil de cumplir y otra casi imposible. En la presente coyuntura la primera parte es de orden político, no hay más que invertir el rumbo de los acontecimientos mediante una política y una línea determinada de desarrollo de los textos constitucionales, sobre todo en el título octavo que confusamente describe el estado de las autonomías. La

segunda parte, por el contrario, al ser de orden represivo antiterrorista es sumamente difícil de aplicar por no decir que prácticamente imposible. La experiencia de la represión durante la dictadura indica que el terrorismo no va a disminuir.



Panorama que se complica aún más si se tiene en cuenta que, en la hipótesis de éxito general en la aplicación de este acuerdo, tampoco quedaría reabsorbida la amenaza sobre la democracia. El desarrollo de una política de ese tipo traería como consecuencia un ensanchamiento de las condiciones objetivas y de las bases sociales del paragolpismo en la sociedad española. Las tensiones y contradicciones sociales que pueden derivarse de la aplicación total del pacto

en todas sus facetas, teniendo en cuenta que la izquierda ya ha perdido casi toda su capacidad de control de los movimientos de masa, podría, una vez más, invertir la correlación de fuerzas netamente en favor de los objetivos no democráticos.

Con lo que cumpliéndose o no, o sólo a medias, este compromiso no se cierra la posibilidad de retroceso, sea por vía pacífica o por la vía armada. Porque el precio es difícil de pagar y aún pagándolo nadie se verá libre de la hipoteca. Luego la situación política está condenada a vivir largo tiempo bajo la incertidumbre y la duda que origina la sicosis de golpe. Asfixia y paralización del proceso político que encierra otro grave peligro: la profundización y radicalización de los problemas de todo orden pendientes por resolver y que no se afrontan en la medida en que es prioritario afrontar la amenaza no democrática.

Desde, por y para la derecha

Sin embargo, ésta es la única posibilidad que existe de neutralizar el peligro. O éste se resuelve desde, por y para la derecha o acabará concretándose de la forma más inesperada. Esto es duro de admitir para la izquierda, que hasta en las vísperas del fallado golpe contaba con trasladar a España la alternativa socialdemócrata germánica o sueca o el compromiso histórico a la italiana, pero sería mucho peor admitir las consecuencias que se derivarían de continuar reincidiendo en el infantilismo y en el senilismo que la ha caracterizado durante el periodo de transición. Ha llegado ya la hora final de la ingenuidad política.

Y así y todo está por ver si la derecha, que se mueve en un marco constitucional y democrático, va a poder ajustar las cuentas a las tentativas involutivas. Aún está por ver si después de una corta o larga espera no acaba por llegar Godot sentado en un tanque. Aunque, muy probablemente, si se llega a este nuevo intento no democrático, no sería el definitivo, cobrará formas mucho menos espectaculares y teatrales que la que hemos vivido a finales de febrero. En esta hipótesis no se repetiría la comedia de Pavia representada por Tejero en el Congreso de los Diputados. Ya aclaró alguien hace tiempo que los sucesos históricos que se repiten lo hacen una vez como tragedia y otra como farsa. (Dibujos de RAMON.) ■